

CONSULTA 3/2018.

INFORME DE LA IGAC DE 16 DE MAYO DE 2018

Se resuelve consulta planteada por el Presidente de la Fundación CTL Cantabria respecto a la naturaleza jurídica de las disposiciones dinerarias de fondos concedidas por la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral de Cantabria (F. CTL) a favor de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CANTUR)

Se ha recibido en esta Intervención General CONSULTA ACLARATORIA 3/2018 PLANTEADA POR EL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CTL CANTABRIA RESPECTO A LA NATURALEZA JURÍDICA DE LAS DISPOSICIONES DINERARIAS DE FONDOS CONCEDIDAS POR LA FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL DE CANTABRIA (F. CTL) A FAVOR DE LA SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR), solicitando *“se informe si la misma se puede considerar como una aportación dineraria, según lo establecido en el apartado 3 del artículo 2 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria y, por tanto, excluida de dicho ámbito de aplicación; en segundo lugar, el procedimiento correcto a seguir para su otorgamiento en el caso de que sea de conformidad lo indicado en el primer punto, y por último, en el supuesto que no le sea de aplicación el anterior precepto legal, la calificación jurídica de la misma así como los trámites a seguir para su concesión y cumplimiento de los principios que le sean de aplicación”*.

Se ha acompañado a la formulación de la consulta el Acuerdo de Colaboración suscrito en Santander el 26 de mayo de 2014, las páginas concretas del anteproyecto de informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, las alegaciones presentadas por la Fundación CTL al mismo y las páginas concretas del informe anual definitivo del Tribunal de Cuentas.

Por parte de esta Intervención General se ponen de manifiesto las siguientes:

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- Se ha incorporado entre la documentación remitida, el *“Acuerdo de Colaboración entre la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria (CTL) y la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CANTUR) para el establecimiento de sinergias entre el fomento del transporte intermodal y la promoción turística de Cantabria”*, suscrito el 26 de mayo de 2014, si bien sin Anexos ni las prórrogas que constan suscritas de la documentación existente en esta Intervención General. De la lectura de su denominación y de la cláusula primera del instrumento jurídico que da cobertura a las actuaciones objeto de consulta se desprende que ambas entidades suscriptoras pretenden, en ejercicio de sus respectivas competencias, de acuerdo con sus normas de creación y estatutarias, realizar actuaciones conjuntas para el cumplimiento de sus fines. Así, las cláusulas primera y segunda del Acuerdo disponen que:

“[...] El objeto del presente Acuerdo es establecer el marco de colaboración entre la Fundación CTL Cantabria y CANTUR con el fin de fomentar el transporte intermodal y la promoción turística de Cantabria

mediante el desarrollo de acciones conjuntas de comunicación, divulgación y transmisión de conocimientos y mensajes.

Con tal finalidad, el Acuerdo establece la colaboración entre ambas partes mediante la cofinanciación de acciones que se ejecuten al efecto hasta un máximo de TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (3.750.000,00.-€), IVA incluido, con carácter anual que se cofinanciará al cincuenta por ciento (50%) por cada una de las dos partes, condicionados a la existencia de crédito adecuado y suficiente en ambas partes.

A los efectos de llevar a la práctica el presente Acuerdo, cada una de las entidades signatarias aportará o acordará solicitar de forma coordinada cuantos datos, documentos e informes resulten necesarios para confeccionar el correspondiente expediente que permitan obtener los medios económicos para conseguir el cumplimiento de los objetivos de este Acuerdo.

SEGUNDA.- DESARROLLO DEL ACUERDO.

Este Acuerdo de Colaboración se desarrollará vía acciones concretas y siempre dentro del objeto descrito en la cláusula primera.

En este sentido, los expedientes o contratos que se formalicen con terceros en base al desarrollo del presente Acuerdo, serán suscritos por la entidad signataria que lleve a cabo el expediente de contratación, pasando ésta a denominarse entidad gestora del expediente.

Asimismo, las contrataciones emanadas del Acuerdo se realizarán de acuerdo al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público [...].

Y ello dentro del marco fijado en los exponendos previos del Acuerdo de Colaboración y, en concreto, en el noveno en el que se afirma que "[...] CANTUR y la Fundación CTL Cantabria, al objeto de potenciar el binomio transporte-turismo, concebido en una de sus ramas como fomento de la intermodalidad y del transporte sostenible, están interesadas en promover conjuntamente el transporte y la actividad turística de Cantabria a través de acciones comunes que aúnen esfuerzos y logren sinergias en busca de un fin común, el impulse de la actividad económica de Cantabria [...]."

Por lo tanto, lo que existiría derivado de este instrumento jurídico, sería una colaboración de dos entes mediante acciones conjuntas y una contribución de fondos en atención a un fin común en ejercicio de las mutuas competencias, sin perjuicio de que para los expedientes, actuaciones o contratos que se formalizasen con terceros sólo una de las partes tramitara el expediente.

SEGUNDA.- No obstante, del texto del Acuerdo de Colaboración remitido no se permite dilucidar las actuaciones concretas a llevar a cabo conjuntamente por ambos entes, asimilándose más bien el instrumento jurídico a lo que en el ámbito administrativo sería un "*Protocolo de Intenciones*", y entendiéndose que ha sido precisamente de la divergencia entre dicho instrumento jurídico que da cobertura a las actuaciones y las

acciones realmente llevadas a cabo de donde se han derivado las dudas acerca de su naturaleza jurídica, así como del verdadero carácter de los fondos aportados.

Por un lado, del análisis del Anexo nº 1 al referido Acuerdo, en el que se concreta el “*compromiso de co-financiación de acciones*”, en el que se recogen tres acciones a llevar a cabo, siendo en las tres la entidad gestora CANTUR y que comprenden “*Servicios de marketing*” (Acción nº 1), “*Promoción y difusión cultural y comercial de Cantabria*” (Acción nº 2), y “*promoción para el refuerzo de la imagen de Cantabria*” (Acción nº 3) (página 10 del informe definitivo complementario al de auditoría de cuentas anuales de la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral de Cantabria CTL correspondiente al ejercicio 2015) y que se entienden encuadradas en el objeto social de la misma, y que, sin embargo, parece que resulta más difícil encuadrar entre los fines de la Fundación CTL, regulados en el artículo 6 de sus Estatutos, tal y como se reproduce en el exponiendo segundo del Acuerdo de Colaboración.

“Dichos fines vienen regulados en el artículo 6 de sus estatutos al disponer que la Fundación tiene por fines, con carácter general “el fomento y la práctica de la investigación científica, el desarrollo tecnológico, el asesoramiento técnico, la innovación tecnológica, la transferencia de tecnología, la formación e información tecnológica, el desarrollo de la Sociedad de la Información, la promoción e investigación medioambiental y la divulgación técnica en logística integral de los sectores del transporte de viajeros y mercancías en general y especialmente en las actividades donde interviene la logística portuaria y aeroportuaria, con el objetivo de mejorar la competitividad empresarial, optimizar la cadena logística, facilitar el desarrollo de cadenas de transporte intermodal, contribuir a la generación de conocimiento y desarrollo de la capacidad de innovación tecnológica del sector transporte y al desarrollo de recursos humanos cualificados en el sector”.

Ni tampoco dentro de los objetivos plasmados en los exponendos tercero y séptimo del Acuerdo de Colaboración:

“[...] TERCERO.- Que la Fundación CTL Cantabria, a través del área “Fomento del transporte de interés público suprarregional” tiene como objetivo alcanzar la interoperabilidad e integración de los distintos modos de transporte para fomentar una mejora en la movilidad (intermodalidad/comodalidad), la dimensión medioambiental del sistema de transportes y el fomento del transporte suprarregional, mediante el desarrollo de los tráficos transversales con destinos nacionales y de las conexiones internacionales, y el fomento de la intermodalidad entre el modo aéreo y el resto de los modos de transporte. [...]”

SÉPTIMO.- Que el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020, fue aprobado por Acuerdo de Consejos de Ministros de 15 de julio de 2005. Dicho Plan pretende ser la expresión de una nueva política de infraestructuras y transportes, concebida como un instrumento al servicio de grandes objetivos en materia de política económica y social, y que sirva como soporte para que los ciudadanos dispongan de unos servicios de transporte de calidad y seguros, impulsando asimismo el desarrollo económico y la cohesión social y territorial.

Para su consecución, el Plan opta por una concepción intermodal del sistema de transporte y la cooperación con los operadores de transporte, planteando el apoyo que deben realizar las Administraciones al apoyo de iniciativas que favorezcan la integración y armonización de cadenas de transporte de los operadores y la consolidación de operadores intermodales [...]”.



GOBIERNO
de
CANTABRIA

Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo

INTERVENCION GENERAL



A estas dudas puestas de manifiesto contribuye el hecho de que mediante la suscripción de la Adenda II al Acuerdo de Colaboración, suscrita el 22 de diciembre de 2016, se acordó modificar la cláusula primera de la Adenda I al citado Acuerdo, conviniéndose que quedara redactada como sigue:

"[...] El objeto del presente Acuerdo es establecer el marco de colaboración entre la Fundación CTL Cantabria y CANTUR con el fin de fomentar el transporte intermodal y la promoción turística de Cantabria mediante el desarrollo de acciones conjuntas de comunicación, divulgación y transmisión de conocimientos y mensajes.

Con tal finalidad, el Acuerdo establece la colaboración entre ambas partes mediante la cofinanciación de acciones que se ejecuten al efecto hasta un máximo en la cantidad de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (4.450.000,00.-€), IVA incluido, cofinanciado en un 60'50 % por parte de la Fundación CTL Cantabria y en un 39,50 % por parte de CANTUR debido a modificaciones presupuestarias y condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en ambas partes.

A los efectos de llevar a la práctica el presente Acuerdo, cada una de las entidades signatarias aportará o acordará solicitar de forma coordinada cuantos datos, documentos e informes resulten necesarios para confeccionar el correspondiente expediente que permitan obtener los medios económicos para conseguir el cumplimiento de los objetivos de este Acuerdo [...]."

No obstante, mediante la suscripción de la Adenda III al Acuerdo de Colaboración, suscrita el 30 de diciembre de 2016, se acordó modificar de nuevo dicha cláusula primera acordándose que quedara redactada como sigue:

"[...] El objeto del presente Acuerdo es establecer el marco de colaboración entre la Fundación CTL Cantabria y CANTUR con el fin de fomentar el transporte intermodal y la promoción turística de Cantabria mediante el desarrollo de acciones conjuntas de comunicación, divulgación y transmisión de conocimientos y mensajes.

Con tal finalidad, el Acuerdo establece la colaboración entre ambas partes mediante la cofinanciación de acciones que se ejecuten al efecto hasta un máximo de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (5.858.554,65.-€), IVA incluido, cofinanciado en un 50% por parte de la Fundación CTL Cantabria y por parte de CANTUR condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en ambas partes.

A los efectos de llevar a la práctica el presente Acuerdo, cada una de las entidades signatarias aportará o acordará solicitar de forma coordinada cuantos datos, documentos e informes resulten necesarios para confeccionar el correspondiente expediente que permitan obtener los medios económicos para conseguir el cumplimiento de los objetivos de este Acuerdo [...]."

Todos esos datos parece que han llevado a poner de manifiesto en las conclusiones de los informes definitivos complementarios al de auditoría de cuentas anuales de la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral de Cantabria CTL correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016 la existencia "de dudas razonables acerca de la naturaleza jurídica del Acuerdo de Colaboración", el cumplimiento de los fines fundacionales, su "cabida en el objeto fundacional" (2015), el procedimiento establecido para su concesión

(2016) así como el volumen de las cantidades *“desde la perspectiva de los gastos cabe destacar, dado su importancia cuantitativa, el montante de las ayudas monetarias asociadas a la actividad destinada al fomento del transporte de interés público suprarregional. Dichas ayudas monetarias se enmarcan en la actividad turística de Cantabria, el cual absorbe el 72’13% de los ingresos obtenidos por la FCTL para el ejercicio 2016”*. Todo ello genera ciertas dudas sobre si las actuaciones realmente llevadas a cabo encajan exactamente en el objeto y términos del Acuerdo de Colaboración, pudiendo quebrar así, el amparo jurídico otorgado a la actuación, puesto que del examen de las actuaciones concretas y de la documentación incorporada para su justificación y examinada por los miembros de la Intervención firmantes de los mismos pudiera desprenderse que uno de los entes (Fundación CTL) aporta al otro (CANTUR) las cantidades para que lo realice ostentando este último el poder de decisión real, sin que quede patente ni la realización de actuaciones conjuntas, ni que las mismas realmente converjan en un fin común que integre los fines estatutarios de ambos entes, en particular, la adecuación al objeto social de la Fundación CTL.

Por otra parte, también se pone de manifiesto en las páginas 8 y 9 del informe definitivo complementario al de auditoría de cuentas anuales de la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral de Cantabria CTL correspondiente al ejercicio 2015 que *“a juicio de este órgano de control, los costes imputados por el ente auditado a dicho Convenio son contrarios al principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos [...] Del análisis de los datos económicos del ente, el Convenio celebrado con CANTUR supone, aproximadamente, el 70% de los recursos económicos de la Fundación, con un coste financiero de, aproximadamente, 53.000 € [...]”*. Constando, igualmente en la página 9 que el peso económico del Acuerdo sobre el total de recursos de la Fundación CTL es del 98,12 %, si bien en la página 13 del correspondiente a 2016 se rebaja al 72’13 %.

Por lo tanto, la primera propuesta que podría efectuar esta Intervención General respecto a la aportación de los fondos, sería la **adecuación de dicho instrumento jurídico al objeto que se recoge tanto en los exponendos del mismo como en la cláusula primera, modificando el Anexo a fin de recoger actuaciones concretas que contribuyan efectivamente a ese fin común, así como a la propia denominación del Acuerdo** que hace referencia al *“transporte intermodal”* y a la *“creación de sinergias”*, y a los fines sociales de ambos suscriptores del mismo, conforme a los procedimientos jurídicos acordes con la naturaleza de ambos entes y el respeto a las normas de aplicación, que debería, en principio, implicar, actuaciones y desembolsos económicos por parte de ambos entes.

En esta línea parece podría fundamentarse la *“ampliación de los fines fundacionales”* (informe de la Dirección General del Servicio Jurídico de 10 de agosto de 2017) acordada por el Patronato de la Fundación CTL el 21 de marzo de 2017 y elevado a público el Acuerdo de modificación de estatutos protocolarizado ante el notario D. Íñigo Girón Sierra, número de protocolo mil novecientos cuarenta y siete, el 24 de agosto de 2017, añadiendo en el artículo 6 de los Estatutos, referido a los fines, un segundo párrafo que dispone *“así como el fomento y práctica de cuantas acciones actúen en relación directa o indirecta con el fomento del transporte y contribuyan a la promoción de la Comunidad Autónoma de Cantabria”*, la cual debería también recogerse en la modificación del Acuerdo propuesta.

Deberá tenerse en cuenta, asimismo, tal y como se dice en el fundamento de derecho segundo del informe de la Dirección General del Servicio Jurídico incorporado a la consulta, emitido el 3 de junio de 2013 a petición del Secretario General de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, en relación

con la realización de pagos derivados de determinados Convenios celebrados por SODERCAN, S.A. incluidos en la auditoría de legalidad, operativa y de gestión de 4 de septiembre de 2012, de la Intervención General del Gobierno de Cantabria, que en las actuaciones que se lleven a cabo al amparo del Acuerdo de Colaboración, en su caso, además de su adecuación a la normativa contractual, también debe tenerse en cuenta que:

"[...] aunque no se les aplique la L.S., siempre que sean susceptibles de ser calificadas como ayudas de acuerdo con los artículos 87 a 89 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea (artículos 107 TFUE) habrían de cumplir con el deber de comunicar a la Comisión su establecimiento, concesión, o modificación con el objeto de que se declare su compatibilidad con el mercado común con carácter previo a que dichas aportaciones se hagan efectivas".

Explicitándose en el fundamento de derecho cuarto supuestos en que deberían considerarse las actuaciones "ayudas de estado". Aspecto puesto de manifiesto también en la página 15 del informe definitivo complementario al de auditoría de cuentas anuales de la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral de Cantabria CTL correspondiente al ejercicio 2016 en cuanto a las actuaciones objeto de verificación.

TERCERA.- No obstante, planteada realmente en estos términos la situación, parece procedente responder a la consulta, teniendo en cuenta que lo que realmente se está haciendo, que requeriría, asimismo, una modificación del Acuerdo a fin de ajustarlo a la realidad y al cumplimiento de los fines fundacionales del ente aportante, que parece ser la Fundación CTL, en virtud de lo expuesto anteriormente.

En este sentido, el artículo 2.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que tiene carácter básico conforme a lo dispuesto en la disposición final primera, dispone que:

"2. No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias entre diferentes Administraciones públicas, para financiar globalmente la actividad de la Administración a la que vayan destinadas, y las que se realicen entre los distintos agentes de una Administración cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos Generales de la Administración a la que pertenezcan, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tenga atribuidas, siempre que no resulten de una convocatoria pública". [...]

El artículo 2.3 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, prácticamente en los mismos términos, prevé que:

"3. No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ley las aportaciones dinerarias entre diferentes Administraciones Públicas, para financiar globalmente la actividad de la Administración a la que vayan destinadas, y las que se realicen entre los distintos Entes pertenecientes al Sector Público Autonómico cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos Generales de la Administración a la que pertenezcan, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tengan atribuidas, siempre que no resulten de una convocatoria pública".

Por tanto, tal y como el propio órgano de consulta aporta, podrían ser de aplicación los fundamentos y conclusiones del Informe de la Intervención General de la Administración del Estado de 4 de mayo de 2007 que resuelve una consulta relativa al alcance que ha de darse al artículo 2.2 de la Ley General de

Subvenciones en su redacción dada por la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de 2007. Dice así el informe por cuanto aquí nos interesa:

"[...] el artículo 2.2 establece dos tipos de figuras que no tienen la consideración de subvención pública. La primera se refiere a las aportaciones dinerarias realizadas entre diferentes Administraciones Públicas cuando dichas aportaciones tengan por objeto financiar globalmente la actividad de la Administración destinataria. La segunda se refiere, por su parte, a las aportaciones dinerarias que se realicen entre distintos agentes de una misma Administración cuyos presupuestos estén integrados en los Presupuestos Generales de la Administración que se trate, independientemente de que se destinen a financiar globalmente la actividad o una actuación concreta, siempre que no resulte de una convocatoria pública.

[...] En cuanto a la segunda figura, que no tiene carácter de subvención, prevista en el ya citado artículo 2.2, tres son los requisitos que han de concurrir para su aplicación: 1º) Que las aportaciones dinerarias se realicen entre agentes de una misma Administración cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos Generales de la Administración a la que pertenezcan; 2º) Que la aportación dineraria se destine a financiar globalmente la actividad del destinatario de la misma o bien una actuación concreta; 3º) Que la aportación no resulte de una convocatoria pública.

1º) Aportaciones entre agentes de una Administración en cuyos presupuestos se integran. En este punto se plantea la cuestión de qué ha de entenderse por "agente" de la Administración. El Diccionario de la Lengua Española define el término "agente" como "Que obra o tiene virtud de obrar". Por tanto, habrá de considerarse como agente de una Administración a toda aquella entidad o ente con capacidad de obrar perteneciente a dicha Administración, lo que, en concreto, en el ámbito de la Administración del Estado se refiere tanto a la propia Administración General del Estado como a todos los entes dependientes de aquella con capacidad de obrar, independientemente de su denominación. Así, a título de ejemplo, se incluirán dentro de estos últimos los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las fundaciones públicas, las Agencias, los consorcios, las sociedades mercantiles, etc. Este mismo sentido para el término "agente", como ya se ha puesto de manifiesto, parece ser el utilizado por el legislador en la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, al establecer en su artículo 2 "A los efectos de la presente Ley, el sector público se considera integrado por los siguientes grupos de agentes: [...]"

2. El resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de la Administración del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales y no comprendidos en el número anterior, tendrán asimismo consideración de sector público y quedarán sujetos a lo dispuesto en el Título I de esta Ley y a las normas que específicamente se refieran a las mismas."

Por otra parte, el requisito que estamos analizando hace referencia, además, a la necesidad de que la entidad concedente y la beneficiaria de la aportación integren sus presupuestos en los presupuestos de la Administración a la que pertenecen. En el ámbito de la Administración del Estado ello implica que los presupuestos de ambas entidades estén integrados en los Presupuestos Generales del Estado.

A este respecto, conviene señalar que, de conformidad con el artículo 134.2 de la Constitución Española, "Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignarán el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado".

Por su parte, la definición de lo que se entiende por sector público estatal a efectos de régimen

presupuestario se encuentra recogido en el artículo 2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que dispone que [...]

2º) La aportación dineraria debe destinarse a financiar globalmente la actividad del destinatario de la misma o bien una actuación concreta. Ambos conceptos, financiación global y financiación concreta, se encuentran definidos en la propia normativa subvencional. Así, por financiación global habrá de entenderse lo que al respecto establece el ya reproducido artículo 2.2 del Reglamento General de Subvenciones. Por su parte, respecto a lo que se entiende por financiación concreta, sería de aplicación, a juicio de este Centro Fiscal, lo establecido en el artículo 2.1 b) de la propia Ley General de Subvenciones "Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, (...)".

3º) Que la aportación no resulte de una convocatoria pública. Este requisito implica que si la aportación dineraria se realiza en el ámbito de una convocatoria pública realizada de acuerdo con la Ley General de Subvenciones, dicha aportación tendrá la consideración de subvención y, en consecuencia, le será de aplicación la citada Ley, por contra, cuando la aportación dineraria se realice al margen de cualquier convocatoria pública, siempre y cuando se cumplan los dos requisitos anteriormente analizados, no estaremos ante una subvención y, por tanto, su entrega no estará sujeta a los preceptos de la Ley 38/2003".

Consultado el artículo 1 de la Ley de Cantabria 8/2017, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2018, contempla que "[...] Se aprueban por la presente Ley los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2018, que están integrados por: [...] r) Los presupuestos de las sociedades mercantiles autonómicas" (en el mismo sentido el artículo 1.o) de la Ley de Cantabria 1/2017, de 24 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2017, artículo 1.p) de la Ley de Cantabria 5/2015, de 28 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016 y artículo 1.p) de la Ley 6/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2015), pudiéndose comprobar en el Anexo correspondiente al Sector Público Empresarial y Fundacional 2018 que en el mismo figuran tanto la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria (CTL), en sus páginas 67 y siguientes, como la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CANTUR, S.A.), en sus páginas 189 y siguientes. Lo mismo se constata consultado dicho Anexo de la Ley de Cantabria 1/2017, de 24 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2017.

Por otra parte, del examen de la cláusula primera del "Acuerdo de Colaboración entre la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria (CTL) y la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CANTUR) para el establecimiento de sinergias entre el fomento del transporte intermodal y la promoción turística de Cantabria", se desprende que no nos encontramos ante una convocatoria pública de fondos.

Deben completarse estas afirmaciones con lo ya indicado referido a las Leyes de Presupuestos de Cantabria y lo previsto en el artículo 2 de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, que dispone que:

"[...] 1. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, conforman el sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria:

- a) La Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria.*
- b) Los organismos autónomos dependientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria.*
- c) La Universidad de Cantabria y las entidades que sean dependientes de ella.*
- d) Las entidades públicas empresariales, dependientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, o de cualesquiera otros organismos públicos vinculados o dependientes de ella.*
- e) Las sociedades mercantiles autonómicas, entendiendo por tales aquellas en las que la participación, directa o indirecta, en su capital social de las entidades que integran el sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sea igual o superior al cincuenta por ciento. Para la determinación de este porcentaje, se sumarán las participaciones correspondientes a las entidades integradas en el sector público autonómico, en el caso de que en el capital social participen varias de ellas*
- f) Las Fundaciones del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Cantabria, entendiendo por tales aquellas Fundaciones en las que concurra, alguna de las siguientes circunstancias:*
 - 1.º Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración General de la Comunidad Autónoma, sus organismos públicos o demás entidades del sector público autonómico.*
 - 2.º Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un cincuenta por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades [...]"*

Finalmente, del propio Acuerdo de colaboración se extrae que el capital (CANTUR) o fondos fundacionales (CTL) de ambos entes sobre los que recae la misma consulta fue aportado íntegramente por la Administración, con lo cual, se cumplirían todos los requisitos expuestos para que resultara de aplicación el referido artículo 2.3 de la Ley de Subvenciones de Cantabria.

CUARTA.- Hecho este planteamiento, podría ser también ilustrativo lo previsto en la Circular 6/2013, de 9 de mayo, de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre determinados aspectos relativos al régimen de control de determinadas aportaciones dinerarias a favor de entidades del sector público estatal imputables a los capítulos 4 y 7 de los Presupuestos Generales del Estado, en cuanto nos pueda servir como pauta de actuación. En la misma se recoge que:

"[...] La experiencia de los últimos años en la gestión de los citados créditos presupuestarios ha puesto de manifiesto la dificultad que sigue existiendo en la determinación del régimen jurídico aplicable a la realización de determinadas aportaciones dinerarias o transferencias entre los distintos agentes cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales del Estado, imputables a créditos incluidos en los referidos capítulos presupuestarios.



La citada problemática tuvo su primer reflejo práctico en los cambios que supuso la redacción inicial del artículo 2 apartado 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, respecto del régimen anterior aplicable a este tipo de aportaciones, y que justificó la reforma de dicho apartado a través de la Disposición Final Octava de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 (en adelante, LPGE para el año 2007).

No obstante la modificación operada en la Ley General de Subvenciones, objeto de análisis por esta Intervención General en informe de fecha 4 de mayo de 2007, se estima conveniente emitir la presente Circular a fin de lograr una actuación coordinada y homogénea en el ejercicio de la función de control.

Los distintos aspectos que se estima necesario aclarar, se pueden concretar en el análisis de las siguientes

CUESTIONES

1) Determinar si pueden existir aportaciones dinerarias o transferencias entre los distintos agentes cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos Generales del Estado, imputables a créditos del Capítulo 4 "Transferencias corrientes" y/o a créditos del Capítulo 7 "Transferencias de capital", que puedan tener la consideración de subvenciones públicas, aunque no queden sujetas a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por mandato expreso del legislador.

2) Respecto de aquellas aportaciones que reúnan todos los requisitos previstos en el artículo 2.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a efectos de la no sujeción a la misma, ¿cuál sería la tramitación a seguir para la ejecución de los correspondientes créditos presupuestarios?

3) En relación a las mismas aportaciones a las que se refiere la cuestión anterior, ¿cuál sería el régimen de fiscalización aplicable a los expedientes que se tramitasen para la realización de las citadas aportaciones?

[...] De acuerdo con el tenor literal del apartado 2 del artículo 2 analizado en aquella ocasión y que ha sido transcrito anteriormente, en el mismo se recogen aportaciones que "no están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ley". Ahora bien, ello no significa que no puedan existir aportaciones que, reuniendo todos los requisitos previstos en el artículo 2.2 para su exclusión de la LGS por mandato expreso del legislador, sin embargo, puedan calificarse como subvenciones públicas por reunir los requisitos del apartado 1 del mismo precepto legal. En este sentido, se estima oportuno recordar las consideraciones realizadas en el mismo informe al analizar, en relación a la segunda figura, el segundo de los requisitos que ha de concurrir para la aplicación del artículo 2.2 de la LGS, "que la aportación dineraria se destine a financiar globalmente la actividad del destinatario de la misma o bien una actuación concreta". De acuerdo con las consideraciones realizadas en su momento, "ambos conceptos, financiación global y financiación concreta, se encuentran definidos en la propia normativa subvencional. Así, por financiación global habrá de entenderse lo que al respecto establece el ya reproducido artículo 2.2 del Reglamento General de Subvenciones [que dispone "A los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2 de la Ley General de Subvenciones, se entenderá por financiación global las aportaciones destinadas a financiar total o parcialmente, con carácter indiferenciado, la totalidad o un sector de la actividad de una Administración (...)]. Por su parte, respecto a lo que se entiende por financiación concreta, sería de aplicación, a juicio de este Centro Fiscal, lo establecido en el artículo 2.1.b) de la propia Ley General de Subvenciones: "Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular ya realizados o por desarrollar, o la

conurrencia de una situación, (...)" De lo señalado hasta el momento, cabe concluir que en el caso de la segunda de las figuras previstas en el artículo 2.2 de la LGS, aportaciones dinerarias realizadas entre distintos agentes de una misma Administración cuyos presupuestos estén integrados en los Presupuestos Generales de la Administración de que se trate, puede ocurrir que aunque no estén incluidas en el ámbito de aplicación de la citada LGS por exclusión expresa, sin embargo puedan calificarse como subvenciones públicas por reunir los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la LGS, esto es: "a) que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios; b) que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular (...) debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido; c) que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. [...].

En este caso, no debe olvidarse que todos los entes del Sector Público estatal disponen de un presupuesto aprobado por las Cortes Generales y que cualquier gasto que realicen debe materializarse a través de su propio presupuesto, por lo que con independencia de que la subvención lo sea para una finalidad concreta, no cabe entenderla más que como un mecanismo de financiación que informa sobre la finalidad de la propia financiación".

No obstante, en sentido estricto deben diferenciarse los dos supuestos, esto es, los señalados previamente referidos a aportaciones que pueden calificarse como subvenciones por estar afectadas a un fin concreto, y el segundo grupo, aportaciones dinerarias imputables a créditos del Capítulo 4 "Transferencias corrientes" y/o a créditos del Capítulo 7 "Transferencias de capital" del Presupuesto de Gastos del Estado que si bien son aportaciones entre los distintos agentes cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos Generales del Estado, no estarían en ningún caso incluidos en el ámbito de aplicación de la LGS, en esta ocasión, porque no reúnen las características para ser consideradas subvenciones públicas en los términos indicados. Entre estas últimas, merecen una atención especial las aportaciones o transferencias destinadas a financiar total o parcialmente, con carácter indiferenciado, la totalidad o un sector de la actividad de una Administración Pública o de un organismo o entidad pública dependiente de ésta, que al no reunir los requisitos enunciados en el artículo 2.1 de la LGS no pueden calificarse como verdaderas subvenciones públicas, en sentido estricto. La diferente naturaleza de este tipo de aportaciones ya fue señalada por el Tribunal Constitucional, en Sentencia dictada el 6 de febrero de 1992 (STC 13/1992, Fundamento Jurídico 6), en los siguientes términos:

"Dentro de las subvenciones (...) conviene distinguir por una parte aquellas que responden a una finalidad o acción de fomento, y por otra, las llamadas "subvenciones-dotación" frecuentemente incluidas en los Presupuestos Generales del Estado y que, si bien formalmente caracterizadas como subvenciones, en realidad encubren meras dotaciones presupuestarias destinadas a cubrir las necesidades de financiación de un determinado ente o servicio público y que sólo impropia o en una acepción muy genérica pueden asimilarse a las subvenciones en sentido estricto, constituyendo en realidad transferencias presupuestarias para asegurar la suficiencia financiera del ente público receptor (...) o sencillamente, una forma de financiación del mismo."

En consecuencia, entre las aportaciones dinerarias, imputables a créditos del Capítulo 4 "Transferencias corrientes" y/o a créditos del Capítulo 7 "Transferencias de capital", realizadas entre los distintos agentes

cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos Generales del Estado, cabe distinguir los siguientes supuestos:

a) Aportaciones que se configuran como subvenciones públicas sujetas a la LGS, por reunir las características establecidas en la misma y no reunir todos los requisitos para su exclusión en virtud del artículo 2.2 de la citada Ley. En particular, se entenderán incluidas en este supuesto, las aportaciones que reuniendo los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la LGS resulten de una convocatoria pública.

b) Aportaciones que pueden calificarse como subvenciones públicas por reunir los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la LGS, pero que no están incluidas en el ámbito de aplicación de la citada Ley, por exclusión expresa de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del mismo precepto legal.

c) Otras aportaciones o transferencias que no gozan de la naturaleza de subvenciones y, por tanto, en ningún caso, estarían incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley. Entre estas últimas, cabe destacar las destinadas a financiar total o parcialmente, con carácter indiferenciado, la totalidad o un sector de la actividad, "constituyendo en realidad transferencias presupuestarias para asegurar la suficiencia financiera del ente público receptor (...) o sencillamente, una forma de financiación del mismo."

II

Determinada la posible existencia de aportaciones dinerarias o transferencias entre los distintos agentes cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos Generales del Estado, imputables a créditos del Capítulo 4 "Transferencias corrientes" y/o a créditos del Capítulo 7 "Transferencias de capital", que puedan tener la consideración de subvenciones públicas, pero que no quedan sujetas a la LGS por mandato expreso del legislador, la segunda de las cuestiones que debe ser objeto de análisis es la relativa a la tramitación a seguir para la ejecución de los correspondientes créditos presupuestarios habilitados para la realización de las citadas aportaciones que reúnan todos los requisitos previstos en el artículo 2.2 de la LGS a efectos de la no sujeción a la misma.

A tales efectos, con carácter previo es preciso recordar algunas de las consideraciones que se han venido realizando en diversos informes de este Centro directo, en relación a las normas que disciplinan la naturaleza de los créditos presupuestarios y su ejecución en unas ocasiones reproduciendo la doctrina jurisprudencial reflejada en diversas sentencias del Tribunal Constitucional, (SSTC 63/1986, 13/1992, 76/1992, etc.); y en otras, compartiendo el criterio manifestado por la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado en diversos Dictámenes (entre ellos, merecen especial referencia el de 20 de noviembre de 2002 y 15 de octubre de 2003).

[...] En estos supuestos, deberá determinarse la verdadera naturaleza de la aportación de entre alguno de los dos tipos antes citados:

a) Aportaciones que han de calificarse como subvenciones públicas. Serán aquellas en las que se deduzca la afectación del crédito a la realización de una actuación concreta y determinada, esto es, aportaciones que reúnan los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la LGS para ser calificada como subvención pública, aunque no esté incluida en el ámbito de aplicación de la citada Ley, por exclusión expresa de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del mismo precepto legal.

b) Otras aportaciones o transferencias que no gozan de la naturaleza de subvenciones. Entre estas, cuando el crédito se destine a financiar total o parcialmente, con carácter indiferenciado, la totalidad o un sector de la actividad, constituyendo en realidad transferencias internas para asegurar la suficiencia financiera del ente público receptor.



GOBIERNO
de
CANTABRIA

Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo

INTERVENCION GENERAL



En el supuesto de aportaciones que hayan de calificarse como subvenciones públicas aunque no estén sujetas a la LGS, la tramitación de las citadas aportaciones deberá tener en cuenta el citado límite de tal forma que el acto administrativo o acuerdo que instrumente la relación jurídica entre la Administración y el perceptor deberá concretar las obligaciones y condiciones, formales y materiales, a las que se supedita la aportación dentro de los límites derivados del propio crédito presupuestario [...].

En este sentido, la disposición adicional novena de la Ley de Cantabria 9/2013, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 2014 reguló las **“aportaciones dinerarias a entes pertenecientes al sector público autonómico”** en los siguientes términos:

“[...] Con efectos 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, se establece lo siguiente:

Para hacer efectivas las aportaciones dinerarias que se realicen a los distintos Entes que componen el Sector Público Autonómico, y cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tengan atribuidas, y siempre que no resulten de una convocatoria pública, el acto administrativo que acuerde la concesión de la aportación, o el convenio que se encargue de establecer las obligaciones de las partes intervinientes, deberá incluir, como mínimo, los siguientes extremos:

- a) Determinación del objeto de la aportación y del Ente del Sector Público Autonómico al que se le concede.*
- b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la aportación.*
- c) Pago trimestral de la aportación dineraria cuando su importe supere los QUINIENTOS MIL euros (500.000 €), salvo que, previo informe de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, se autorice otra forma de pago. [Con carácter posterior al acto o convenio que acuerde la concesión, el titular de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo podrá instar al fraccionamiento de los pagos si la situación de la Tesorería así lo requiere].*
- d) Plazo y forma de justificación por parte del Ente del Sector Público Autonómico de la aportación dineraria recibida.*
- e) Consecuencias derivadas del incumplimiento [...].”*

De acuerdo con el fundamento de derecho segundo del citado informe de la Dirección General del Servicio Jurídico incorporado a la consulta, emitido el 3 de junio de 2013, si bien se refería a la disposición adicional décima de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2010, que regulaba este extremo prácticamente en los mismos términos, *“entendemos que tal disposición resulta de aplicación a todas las aportaciones dinerarias dada la amplitud de la redacción de la disposición adicional y su ubicación en la Ley de Presupuestos, destacando su vigencia indefinida”*.

Por lo cual, el Convenio, en su caso, y de no modificarse en los términos indicados en la consideración jurídica de esta consulta, debería adecuarse a estas previsiones.



En todo caso, las actuaciones que pudiera realizar CANTUR con la aportación de estos fondos deberían también adecuarse a lo indicado respecto al respeto a la normativa contractual, a los artículos 87 a 89 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea (artículos 107 TFUE) y, en su caso, a la disposición adicional novena bis de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, introducida por el artículo 24 de la Ley de Cantabria 10/2013, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, con vigencia el 1 enero 2014, regula las “entregas dinerarias sin contraprestación por sociedades mercantiles participadas mayoritariamente por entidades públicas sometidas a esta Ley”, en los siguientes términos:

“[...] 1. Las sociedades mercantiles participadas mayoritariamente por entidades públicas sometidas a esta Ley podrán conceder entregas dinerarias sin contraprestación, en los términos del artículo 3.2 de esta ley, que se regirán por el derecho privado y se ajustarán a las reglas y al procedimiento que elabore la sociedad, de acuerdo con las normas y principios establecidos por la Ley General de Subvenciones y por esta ley y que se referirán como mínimo a lo siguiente:

a) Órgano competente para realizar la convocatoria.

b) El contenido de la convocatoria que, en todo caso, deberá comprender los siguientes extremos:

1º. Objeto, finalidad y condiciones de la entrega dineraria.

2º. Requisitos que deben reunir los perceptores.

3º. Criterios de selección.

4º. Cuantía máxima de la entrega.

c) Medios de publicidad a utilizar para promover la concurrencia e información a facilitar sobre el contenido de la convocatoria. Cuando la convocatoria supere la cantidad de 300.000 euros o cuando las entregas individuales a cada perceptor puedan superar la cantidad de 100.000 euros, además de los medios de publicidad que habitualmente utilice la entidad, se publicará en el «Boletín Oficial de Cantabria».

d) Tramitación de las solicitudes.

e) Justificación por parte del perceptor del empleo de los fondos de las cantidades recibidas.

f) Causas de incumplimiento de las obligaciones establecidas y sistema de penalizaciones en este caso.

2. Las entregas dinerarias serán realizadas por los órganos competentes de la Sociedad de acuerdo con sus propias normas.

3. Para que la concesión de la entrega dineraria sin contraprestación sea efectiva, deberá producirse la aceptación del beneficiario en el plazo de treinta días desde que se notifique el acuerdo. Transcurrido este plazo, se entenderá que renuncia a la misma.

4. Las sociedades mercantiles del sector público autonómico informarán a la Consejería competente en materia de Hacienda sobre las entregas dinerarias sin contraprestación otorgadas y sus incidencias.

5. El control de las entregas dinerarias de las sociedades del sector público autonómico corresponderá a la Consejería competente en razón de la actividad económica de la empresa con la supervisión de la Consejería competente en materia de Hacienda, y todo ello, sin perjuicio de las funciones de control que corresponden a la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Tribunal de Cuentas.

6. Las entidades a que se refiere esta disposición sólo podrán realizar entregas dinerarias sin contraprestación de forma directa en los supuestos a que se refiere el artículo 22.3 de esta Ley. En caso del apartado c), el acuerdo habrá de ser motivado y justificar el interés público, social, económico, humanitario o las demás razones que dificulten la convocatoria pública [...]."

Por tanto, en caso de que no se adopte la primera de las propuestas efectuada por esta Intervención General, debería la Fundación CTL adecuar el Acuerdo a fin de ajustarlo a la realidad y al cumplimiento de los fines fundacionales del ente aportante, en los términos indicados e incluir el contenido de la disposición adicional novena de la Ley de Cantabria 9/2013, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 2014 en cuanto a las **"aportaciones dinerarias a entes pertenecientes al sector público autonómico"**.

De lo expuesto se considera que se extraen las siguientes **CONCLUSIONES**:

PRIMERA.- Esta Intervención General considera, respecto a la aportación de los fondos, que debería adecuarse el instrumento jurídico al objeto que se recoge tanto en los exponendos del mismo como en la cláusula primera, modificando el Anexo a fin de recoger actuaciones concretas que contribuyan efectivamente a ese fin común, así como a la propia denominación del Acuerdo que hace referencia al transporte intermodal y a la creación de sinergias, y a los fines sociales de ambos suscriptores del mismo, conforme a los procedimientos jurídicos acordes con la naturaleza de ambos entes y el respeto a las normas de aplicación.

Las actuaciones que se lleven a cabo al amparo del Acuerdo de Colaboración aunque no se les aplique la L.S., siempre que sean susceptibles de ser calificadas como ayudas de acuerdo con los artículos 87 a 89 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea (artículos 107 TFUE) habrán de cumplir con el deber de comunicar a la Comisión su establecimiento, concesión, o modificación con el objeto de que se declare su compatibilidad con el mercado común con carácter previo a que dichas aportaciones se hagan efectivas.

SEGUNDA.- Tal y como se han configurado realmente las actuaciones, las disposiciones dinerarias de fondos efectuadas por la Fundación CTL a CANTUR se consideran aportaciones dinerarias que reúnen los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la LGS para ser calificadas como subvenciones públicas, aunque no estén incluida en el ámbito de aplicación de la Ley General de Subvenciones ni de la Ley de Subvenciones de Cantabria, por exclusión expresa de las mismas, si bien el acuerdo que instrumente la relación jurídica deberá concretar las obligaciones y condiciones, formales y materiales, a las que se supedita la aportación, .



GOBIERNO
de
CANTABRIA

Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo

INTERVENCION GENERAL



Por tanto, en caso de que no se adopte la primera de las propuestas efectuada por esta Intervención General y plasmada en la conclusión anterior, debería la Fundación CTL adecuar el Acuerdo a fin de ajustarlo a la realidad y al cumplimiento de los fines fundacionales del ente aportante, en los términos indicados e incluir el contenido de la disposición adicional novena de la Ley de Cantabria 9/2013, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 2014 en cuanto a las *"aportaciones dinerarias a entes pertenecientes al sector público autonómico"*.



Santander, a 8 de junio de 2018
EL INTERVENTOR GENERAL

Edo.: Pedro Pérez Eslava